

## MÉXICO Y EL CORONAVIRUS: PASIVIDAD GUBERNAMENTAL EN UNA SOCIEDAD DESIGUAL

**Ricardo Fuentes-Nieva**

9 de abril de 2020

### **Introducción**

La pandemia de la COVID-19 ha desenmascarado rápidamente las brechas socioeconómicas alrededor del mundo: los barrios más pobres sufren más contagios, los trabajadores informales se ven obligados a continuar con sus actividades a pesar del riesgo sanitario, y los países con menos recursos están en dificultades para proteger a su población.

La desigualdad, en sus múltiples dimensiones, es un problema social histórico. Ya lo narraba Cervantes: “Dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía, que son el tener y el no tener”, le decía Sancho Panza al Quijote durante el capítulo dedicado a las bodas de Camacho el Rico, con el suceso de Basilio el Pobre.

México es un país extremadamente desigual en cuanto a ingresos, oportunidades y derechos, además de en cuestión de género, características raciales y étnicas, o color de piel. Las elecciones de 2018 generaron la expectativa de que la nueva Administración enfrentaría las causas y las

consecuencias que dieron lugar a una acumulación histórica de privilegios en muy pocas manos frente a la situación desfavorecida de millones de personas. Sin embargo, en los primeros 16 meses del gobierno se realizaron acciones limitadas y de dudosa efectividad para reducir las desigualdades económicas y sociales. Entonces llegó la pandemia.

México, como el resto del mundo, se encuentra en un momento crucial: la respuesta del gobierno y de la sociedad moldearán el futuro del país. El desafío es enorme para un país que, además de las desigualdades que presenta, ha recibido a la COVID-19 en una situación de gran fragilidad económica, con un sistema de salud fragmentado, con bajas inversiones, y con un gobierno que no se ha mostrado capaz de entender la magnitud de las múltiples crisis.

### **Un país de ingresos medios, enormemente desigual**

México tiene un pie en la élite mundial y el otro en un rezago sistemático, que afecta a millones de personas. El Banco Mundial lo clasifica

como un país de ingreso medio-alto, con un Ingreso Nacional Bruto en paridad de poder adquisitivo (INB/PPA) que ronda los 20.000 dólares<sup>1</sup>.

Pero detrás de los promedios se esconden aristas menos halagadoras para el país. El mismo Banco Mundial refleja que en los últimos 40 años el crecimiento de la economía mexicana ha sido de un magro 2% anual y, si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional, el país ha crecido un bajísimo 1% por año.

Otro aspecto importante, más allá de los promedios, es su enorme desigualdad económica. En México, el índice de Gini —una medida utilizada para indicar la dispersión de algunas variables económicas, como la distribución de los ingresos, y que se cifra entre 0 (perfecta igualdad) y 100 (perfecta desigualdad, o concentración absoluta en una persona)— se encuentra en el 45,4. Aunque este valor ha descendido desde 1996, cuando alcanzó su punto reciente más alto (54,8), el país se encuentra entre los más desiguales del mundo: si según este indicador se ordenan de mayor a menor, México se encuentra entre el 20% más alto<sup>2</sup>.

El índice de Gini es muy popular en los debates sobre la desigualdad eco-

nómica pero, debido a que emplea la información de toda la población, no captura de manera clara la *concentración* del ingreso o riqueza. En las últimas décadas, algunas innovaciones en la recolección de datos y en la investigación sobre las desigualdades económicas permiten entender qué ocurre en la parte más alta de la distribución. Por ejemplo, la World Inequality Database acude a datos fiscales, encuestas y cuentas nacionales, y compila información sobre el porcentaje del ingreso nacional que va al 1 % más rico de un país.

Por su parte, el actual subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, documentó la enorme concentración del ingreso y la riqueza en México, en un informe publicado en 2015 por Oxfam México. Algunos de sus resultados son muy indicativos del nivel de acumulación del ingreso y la riqueza en el país (Esquivel, 2015):

- El 1% de la población más rica recibe el 21 % del ingreso total, en lo que supone uno de los mayores porcentajes entre los países para los que hay información. En otros países este porcentaje fluctúa en un promedio cercano al 10%.
- Entre 1996 y 2014 la fortuna promedio de cada miembro de los cuatro multimillonarios más ricos del país pasó de 1.700 a 8.900 millones de dólares.
- En 2014 estas cuatro mismas personas podían, con solo el 5% de re-

<sup>1</sup> Banco Mundial. Disponible en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=MX>.

<sup>2</sup> *Ibíd.*

torno a su riqueza, contratar hasta 3 millones de trabajadores, pagándoles el equivalente al salario mínimo.

Más allá de las enormes brechas económicas en México, las desigualdades se extienden a otras dimensiones. Otro informe de Oxfam México, de 2019, detalló las diferencias en oportunidades de vida que tienen los ciudadanos de acuerdo con el color de piel y la adscripción étnico-racial, características fuertemente asociadas a patrones de discriminación históricas (Solís, Güemez Graniel y Lorenzo Holm, 2019). Algunos de sus hallazgos son:

- Una de cada diez personas de tono oscuro tiene formación en educación superior, en contraste con una cada cuatro personas de piel clara.
- Seis de cada diez personas hablantes de lenguas indígenas no han completado la educación secundaria, y solo el 6% tiene estudios universitarios.
- Solo una de cada diez personas indígenas accede a puestos directivos (empleadores), mientras que una de cada cuatro personas blancas o mestizas llega a serlo.
- Dos de cada tres personas hablantes de lenguas indígenas pertenecen al grupo más pobre de la población, mientras que únicamente un 3% pertenece al grupo más rico.
- Tan solo el 12% de las personas de piel oscura llegan a ser parte de la población más rica, mientras que el

27% de las personas de piel clara lo logran.

Una de las conclusiones de este análisis es que las brechas comienzan a presentarse en etapas tempranas de la vida y que se mantienen durante todo el ciclo vital, esto es, se reflejan en la educación primaria y se perpetúan hasta los años de empleo. Otra conclusión es que las desventajas se multiplican por los factores étnico-raciales, de género y de color de piel: una mujer indígena con piel oscura tiene muy pocas oportunidades en una sociedad que discrimina, y ha discriminado históricamente, a personas como ella.

Estas cifras muestran que existen “varios Méxicos”, algunos muy privilegiados y otros muy rezagados. Estos distintos Méxicos se encuentran día a día en la calle, pero no necesariamente interactúan. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha documentado la distancia que existe entre los municipios de mayor y menor desarrollo humano en el país: dentro del mismo se produce la misma diferencia que entre un municipio promedio suizo y un municipio promedio de Burundi. México es un país en el que viven cuatro de las 200 personas más ricas del mundo, que coexisten con 98 millones de personas que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), son pobres o se encuentran en una situación de vulnerabilidad (es-

tán en riesgo de caer en pobreza). De por sí, en tiempos normales, México enfrenta enormes desafíos sociales, que se multiplican a causa fragilidades económicas de corto plazo. Estas se tratan en la siguiente sección.

### **Una economía frágil y un sistema de salud con bajo financiamiento**

El año en el que se iba a iniciar la transformación histórica de México (2019) terminó, no con una explosión, sino con un lamento económico. La economía mexicana recibió 2020 con múltiples fragilidades, incluso antes de la emergencia sanitaria que ha desatado la pandemia de la COVID-19.

En 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo virtualmente en el mismo nivel que en 2018: más precisamente, con una ligera caída anual del 0,1%. Esta ausencia de crecimiento se debió a un estancamiento del sector servicios (que representa las dos terceras partes de la producción nacional) y a una caída en la actividad económica industrial.

Las finanzas públicas tampoco han dado motivo al optimismo: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado la debilidad de los ingresos públicos del país, mostrando que, en términos de recaudación impositiva, en 2017 y en 2018 México ha ocupado el último puesto (36°) entre todos sus países. Las diferencias son significativas: en 2018 el

promedio de todos los países de la OCDE en recaudación como porcentaje del PIB era del 34,3%; en México esa relación era del 16,1% (OCDE, 2019). Además, los ingresos petroleros, que históricamente han representado una fuente importante del financiamiento público, han ido a la baja debido a la caída de la producción petrolera, pese a que aún representa casi el 4%.

2019 no presentó mejoras en las finanzas públicas. Los ingresos tributarios y petroleros estuvieron por debajo de las cifras proyectadas en el presupuesto. De hecho, los ingresos del petróleo tuvieron una contracción en términos reales, lo que obligó al gobierno a utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios por un monto de alrededor del 0,5% del PIB (CIEP, 2019).

Adicionalmente, la situación de la deuda ha venido deteriorándose consistentemente. Durante el sexenio pasado, la deuda acumulada (Requerimientos Financieros del Sector Público, RFSP) aumentó en 8 puntos, del 37% al 45% del PIB. Aunque el gobierno actual ha estabilizado esta situación, y ese porcentaje es relativamente pequeño comparado con otros países, dos anuncios recientes complican el panorama inmediato de la deuda pública mexicana. El primero radica en los prospectos de las agencias como Moody's y Standard & Poors, que han calificado negativamente el pronóstico de la deuda

soberana, debido a la estrategia de la empresa estatal Petróleos de México (Pemex). El segundo consiste en la decisión de seguir manteniendo una estrategia hacia Pemex susceptible de absorber cuantiosos recursos de la hacienda pública, que en su lugar podrían usarse para la emergencia.

Por si la situación macroeconómica y de las finanzas públicas no fuera de por sí preocupante, el sector sanitario del país está fragmentado, e históricamente se ha invertido poco en él. Es más, ya antes de la presión que está ocasionando la pandemia de la COVID-19, tenía dificultades para atender a una población del tamaño de México y el perfil de sus enfermedades.

La inversión en el sistema público de salud es, como se ha adelantado, muy limitada. Alemania, Japón y Francia destinan más del 9% del PIB a su salud pública; España e Italia se limitan al 6%, y Corea emplea el 4,8%. México únicamente invierte alrededor del 2,3% del PIB, lo que además se traduce en una menor infraestructura. Asimismo, de acuerdo con la OCDE, mientras que Alemania, Corea del Sur o Japón cuentan con 6-7,5 camas por cada 1.000 habitantes; y Reino Unido, Estados Unidos, España e Italia cuentan con 2-2,5 camas; México solo cuenta con 1,38 camas por cada 1.000 habitantes.

La fragmentación del sector sanitario, así como la falta de inversión,

revierte sobre los grupos más pobres de la población mexicana. En 2018, seis de cada diez personas declararon que, durante su última enfermedad, tuvieron que pagar por sus medicamentos. Y, a pesar de que una proporción mayor de personas reporta tener cubierto el derecho a la salud, el ejercicio de este derecho muchas veces se realiza en condiciones de precariedad y desigualdad, lo cual se refleja en la calidad de los servicios, en las dificultades de acceso y en el costo de los medicamentos (Vázquez y Jaramillo-Molina, 2020).

A estas condiciones de baja inversión e ineficiencia institucional, se agrega —por si no fuera suficiente—, que 2020 inició con un cambio mayúsculo en el sistema sanitario. En enero, el gobierno federal eliminó el Seguro Popular (formalmente, el Sistema de Protección Social en Salud, SPSS), sustituyéndolo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El SPSS fue diseñado e iniciado en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), y buscaba dar cobertura sanitaria a quienes no tenían acceso a un sistema de protección a través del empleo, en particular a las personas auto-empleadas, a los trabajadores del sector informal, a los desempleados y a las personas que se encontraban fuera del mercado de trabajo, así como a sus familias (Gómez-Dantés, Sesma, Becerril, Knaul, Arreola y Frenk, 2011).

Tras casi dos décadas de actividad, el SPSS todavía afrontaba enormes desafíos. Su sustitución por el INSABI generó mucho escepticismo, sobre todo por la promesa de que este Instituto iba a ofrecer medicamentos y atención médica completamente gratuita, sin aumentar para ello los recursos financieros ni centralizar la atención médica, y sin aclarar qué tipo de enfermedades cubriría. En esta transición institucional del sistema sanitario llegó la pandemia de la COVID-19.

### **La respuesta ante la pandemia**

La tercera década del milenio inició con las noticias de un nuevo virus que se esparcía rápidamente por el este de Asia. México tuvo su propia experiencia como epicentro de una epidemia importante en 2009, cuando la gripe A (influenza H1N1) se originó dentro del país antes de diseminarse por varios lugares del mundo.

La respuesta del gobierno mexicano ante la amenaza de la COVID-19 inició apenas comenzó el año. La prevención parece haber sido una manera de sustituir la falta de recursos humanos, financieros y de material. Los países que mejor han respondido a la pandemia cuentan con más y mejores recursos sanitarios. Ciertamente, se trata de un porcentaje de países muy bajo. En salud, China invierte en términos del PIB un porcentaje similar al de México, aunque su sistema político puede

instrumentar medidas de mitigación mucho más agresivas. En sus acciones iniciales, el gobierno mexicano tomó en cuenta el aprendizaje sobre el monitoreo y respuesta a la epidemia H1N1, sin perder de vista la vulnerabilidad de una gran proporción de su población.

Las condiciones de pobreza y desigualdad en las que vive gran parte de la sociedad mexicana, aunadas a la fragilidad macroeconómica y a un sistema de salud fragmentado, con pocos recursos y en transición, multiplican el grado del desafío que enfrenta el país. A pesar de estas limitaciones, la enormidad de la crisis de la COVID-19 necesita una respuesta contundente y determinada.

Ante ella, muchos países están aplicando una agresiva política fiscal, contracíclica, que afronta no solo los efectos de la pandemia en el sector sanitario, sino también su repercusión sobre el empleo formal e informal, y en las personas en situación de vulnerabilidad económica. El 27 de marzo, 55 países ya habían anunciado algún tipo de acción, entre las que se incluyen: propuestas cercanas a una renta ciudadana temporal; subsidios para los trabajadores, con o sin condicionamiento; seguros de desempleo y suspensión de despidos; o pagos a familias para cubrir los cuidados (Krozer y Fuentes-Nieva, 2020). De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias: “Chile dedicará recursos equivalentes al

4,7% de su PIB, Brasil 2,2%, Perú 2,1%, Argentina 1,5% y Colombia 1,3%” (CEEY, 2020). Más aún, el gobierno de Perú anunció el 30 de marzo un paquete de alrededor del 12% de su PIB.

México, por su parte, tiene un espacio fiscal limitado, agravado por la fuerte caída en los precios del petróleo y el precario estado financiero de Pemex. Aun así, hay margen para acometer acciones más decididas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 78% de la deuda total del gobierno es interna, lo que implica que incluso ante una devaluación la situación es manejable. De hecho, las acciones indicadas en otros países latinoamericanos se están realizando en contextos fiscales reducidos, donde los desafíos de pobreza y desigualdad son similares al caso mexicano.

Diversos analistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil—entre ellos, Santiago Levy, antiguo vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), y el CEEY— han presentado propuestas sobre cuál debería ser la composición del paquete fiscal y de políticas públicas que ayude al país<sup>3</sup>. Las propuestas son diversas y no resulta sencillo

sintetizarlas, pero hay tres elementos que la mayoría de los informes subrayan:

- Inversión inmediata al sector salud.
- Protección a los empleos formales y a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
- Apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad económica, en especial a aquellas que dependen de la economía informal, por medio de transferencias monetarias no condicionadas.

En cualquier paquete de rescate económico debe darse una consideración especial a las personas más vulnerables. Como se ha señalado, el 78% de la población mexicana (98 millones de personas) es pobre o está en riesgo de caer en la pobreza, y 31 millones tienen empleos informales. Ante las medidas de mitigación de contagio, distanciamiento social y resguardo en los hogares, millones de ellas se enfrentarán a un dilema de graves consecuencias: proteger su salud o proteger su capacidad de generar ingresos.

Muchos países de la región ya han adoptado paquetes de ayuda sociales. Por ejemplo, en Argentina el Ingreso Familiar de Emergencia destinará el equivalente a 4.000 pesos a 3,6 millones de personas; el Bono Familiar en Bolivia suministrará cerca de 2.000 pesos a familias de bajos recursos; y, en Colombia, un Pago Solidario beneficiaría a 3 millones de

<sup>3</sup> El CIEP estima que un paquete de apoyo requeriría entre 349.091 y 580.979 millones de pesos. Esto es, entre el 1,3% y el 2,2% del PIB de México (CIEP, 2020).

familias (Krozer y Fuentes-Nieva, 2020).

Oxfam México ha propuesto para el caso mexicano una transferencia no condicionada, acompañada de una focalización territorial. Esta propuesta, que requeriría implementar las transferencias en el menor tiempo posible, se basa en la ausencia de un padrón único de beneficiarios sociales, en el patrón emergente de casos de contagio, y en el nivel de marginación urbana, análogo al que se está viendo en Barcelona o en Nueva York. Por ello, estas políticas han de incorporar en su diseño el fenómeno de la desigualdad urbana: en muchas ciudades del mundo los servicios de acceso a las infraestructuras públicas de la salud, el transporte, la educación, e incluso de los empleos, están concentrados en las zonas de mayor ingreso; Ciudad de México y otras ciudades del país no son una excepción (Fuentes-Nieva y Vázquez, 2020).

Sin embargo, hasta momento, parece que estas propuestas no importan: el presidente de México ha tomado la decisión de continuar con sus planes preestablecidos antes de la llegada de la COVID-19. Durante el informe de gobierno trimestral del 5 de abril, Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje claro: las crisis sanitaria, económica y laboral que enfrenta México se gestionará con el programa de políticas públicas diseñado antes de la pandemia. Ante el reto

más grande que México y el mundo han enfrentado en décadas, López Obrador simplemente ha prometido continuar con lo que se estaba haciendo.

El principio primordial de la Administración es la “austeridad republicana”, que implica no aumentar los impuestos y no contraer la deuda pública. Así, los recursos adicionales que se encuentran en los fondos de estabilización y en otros fideicomisos públicos, se emplearán para expandir programas preexistentes e inversiones supuestamente productivas, no asociadas a la contingencia actual. Pemex recibirá 65.000 millones de pesos adicionales, incluso cuando el precio del crudo mexicano está en mínimos históricos. Es cierto que se han anunciado créditos por valor de 25.000 millones de pesos (un 0,1% del PIB mexicano), aunque no está claro quién podrá acceder a ellos ni en qué condiciones.

La estrategia del gobierno es muy arriesgada: los programas sociales existentes incluyen apoyos a campesinos, pescadores y productores de campo, así como a adultos mayores y a aprendices. Pero ninguno de estos programas cubre a la población que potencialmente puede verse más afectada por la caída de la actividad económica: los trabajadores informales urbanos. Además, aunque una de las primeras respuestas ante la pandemia en el resto del mundo ha sido la protección laboral, el presidente de

México anunció el 5 de abril una reducción de los salarios de los trabajadores de la Administración federal, incluyendo el bono de fin de año, un derecho laboral de acuerdo con la legislación mexicana.

### Conclusión

El gobierno mexicano está inmerso en una carrera contra el tiempo para implementar un plan de rescate económico sólido, que combina la expansión del gasto público con mecanismos de estabilización de las finanzas públicas. Si no tiene éxito, la recesión será cada vez más aguda y el acceso a los mercados financieros más restringido.

Pero las señales que ha dado hasta ahora el presidente López Obrador son preocupantes. Al redoblar la apuesta por su agenda de largo plazo, está poniendo en riesgo a millones de personas, cuya vida social, laboral y de cuidados ha quedado alterada por la pandemia. Hay un riesgo potencial de tragedia: millones de personas dependen de la economía informal y no van a recibir a corto plazo transferencia alguna. 52,4 millones de personas viven en la pobreza y 45,3 millones son vulnerables, pero solo 22 millones forman parte de los padrones de los programas sociales vigentes. No es complicado calcular que alrededor de 75 millones de personas se enfrentan a una disrupción económica, sanitaria, laboral y social, sin contar con recursos adicionales del gobierno mexicano.

El impacto de la crisis y de la inacción gubernamental no parará en los meses siguientes. Las decisiones que las familias y las personas toman en contextos de estrés económico y de salud (cambiar de dieta, vender herramientas de trabajo, sacar a las niñas de la escuela, etc.) a menudo tienen consecuencias que duran toda la vida, y algunas veces se transmiten entre generaciones. Es el costo invisible pero profundo de los choques que no son atendidos a tiempo.

México y todo el mundo están cambiando a causa de la COVID-19. Y cambiarán aún más, aunque todavía no sabemos cómo. Hay una esperanza de que la crisis abra una oportunidad para construir un México más justo, menos desigual, con mayor protección del Estado, y que genere un contrato social renovado. Para ello se necesita liderazgo político, mucha flexibilidad y valentía. La esperanza, cada día más lejana, es que la tengamos en algún momento.

*Ricardo Fuentes-Nieva es director ejecutivo de Oxfam México desde 2015. Previamente fue jefe de investigación de Oxfam Internacional. También ha trabajado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y el departamento de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es Máster en Economía por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.*

### Referencias bibliográficas

- CEEY (2020): “Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus en México”, México. Disponible en: <https://ceey.org.mx/hacia-un-plan-integral-para-atender-las-consecuencias-economicas-de-la-pandemia-de-coronavirus-en-mexico-2/>.
- CIEP (2019): “Ingresos públicos en millones de pesos”, México. Disponible en: <https://ciep.mx/ingresos-publicos-en-millones-de-pesos-enero-diciembre-2019/2019-info-lif-comparativo-12-diciembre-1/>.
- CIEP (2020): “Consideraciones de política fiscal ante el COVID-19”, México. Disponible en: <https://ciep.mx/consideraciones-de-politica-fiscal-ante-el-covid-19/>.
- ESQUIVEL, G. (2015): *Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político*, México, Oxfam. Disponible en: [https://www.oxfam.mx/sites/default/files/desigualdadextrema\\_informe.pdf](https://www.oxfam.mx/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf).
- FUENTES-NIEVA, R. y VÁZQUEZ, D. (2020): “Transferencias no condicionadas, opción para los más pobres ante el COVID 19”, *Animal político* (3 de abril). Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/la-gran-brecha/transferencias-no-condicionadas-opcion-para-los-mas-pobres-ante-el-covid-19/>.
- GÓMEZ-DANTÉS, O., SESMA, S., BECERRIL, V.M., KNAUL, F.M., ARREOLA, H. y FRENK, J. (2011): “Sistema de salud de México”, *Salud Publica Mex* 53, supl. 2, pp. 220-232. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/17.pdf>.
- KROZER, A. y FUENTES-NIEVA, R. (2020): “Salud o subsistencia. Una decisión imposible e injusta en tiempos del COVID-19”, *Eme-Equis* (2 de abril). Disponible en: [https://mex.com.mx/analisis/-salud-o-subsistencia-una-decision-imposible-e-injusta-en-tiempos-del-covid-19?fbclid=IwAR3bArPQhQ3d-sb\\_zi\\_GA2Be02d4ZE\\_\\_hemr1Z4EnMbroK6M-1w4tUiGI8](https://mex.com.mx/analisis/-salud-o-subsistencia-una-decision-imposible-e-injusta-en-tiempos-del-covid-19?fbclid=IwAR3bArPQhQ3d-sb_zi_GA2Be02d4ZE__hemr1Z4EnMbroK6M-1w4tUiGI8).
- OCDE (2019): “Revenue Statistics 2019: México”, París. Disponible en:

[https://www.oecd.org/tax/rev  
enue-statistics-mexico.pdf](https://www.oecd.org/tax/rev<br/>enue-statistics-mexico.pdf).

SOLÍS, P., GÜEMEZ GRANIEL, B. y  
LORENZO HOLM, L. (2019):  
*Por mi raza hablará la de-  
sigualdad*, México, Oxfam.  
Disponible en:  
[https://www.oxfamMexico.or  
g/sites/default/files/Por%20m  
i%20raza%20hablara%20la%  
20desigualdad\\_0.pdf](https://www.oxfamMexico.org/sites/default/files/Por%20m<br/>i%20raza%20hablara%20la%<br/>20desigualdad_0.pdf).

VÁZQUEZ, D. A. y JARAMILLO-  
MOLINA, M. E. (2020): “Los  
retos del sistema de salud en  
México”, *Revista Nexos*. Dis-  
ponible en:  
[https://economia.nexos.com.  
mx/?p=2922](https://economia.nexos.com.<br/>mx/?p=2922).

### Fundación Carolina, abril 2020

Fundación Carolina  
C/ Serrano Galvache, 26.  
Torre Sur, 3ª planta  
28071 Madrid - España  
[www.fundacioncarolina.es](http://www.fundacioncarolina.es)  
@Red\_Carolina

ISSN: 2695-4362

[https://doi.org/10.33960/AC\\_16.2020](https://doi.org/10.33960/AC_16.2020)

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)